

JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil veintitrés.

REF:	Ejecutivo
RAD.	110013103027 20170039100
Asunto	Sentencia

Procede el Despacho a dictar sentencia anticipada de conformidad con lo dispuesto por el art. 278 num. 2 del C.G.P., por no existir pruebas que practicar dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES:

ANGEL BAUDILIO GALEANO CASAS, mediante apoderado solicitó librar mandamiento de pago en su favor y en contra de MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA y JOSÉ FLORIBERTO VALBUENA GONZÁLEZ por las sumas de \$90'000.000, \$150.000.000 y \$200.000.000 como capitales representados en tres letras de cambio aportadas como base del recaudo con fechas de vencimiento 22 de diciembre de 2014, 25 de marzo y 4 de agosto de 2015 respectivamente, igual que por los intereses moratorios causados por estas sumas y las costas del proceso.

La demanda se presentó el 1° de junio de 2017¹, y por auto del 6 de julio de 2017 se libró mandamiento de pago² por los capitales adeudados e intereses de mora desde que las obligaciones se hicieron exigibles. Dispuso además la notificación de los ejecutados en la forma prevista en los art. 290 y s.s. del C.G.P.

Notificados los demandados: señora Mayeni Lisbeth Valbuena se tuvo notificada de conformidad con el art. 292 del C.G.P., aviso entregado el 17 de agosto de 2018³ y el señor José Floriberto Valbuena, a través de su apoderado⁴ a quien se le envió el link del expediente el día 20 de agosto de 2021⁵, como así se dispuso en auto del 12 de agosto de 2021⁶.

Guardando silencio la demandada Mayeni Lisbeth Valbuena Avila, y el apoderado del señor José Floriberto propuso las siguientes excepciones de mérito: <cons. 10 pdf 2 y 3>:

PRESCRIPCION de la acción cambiaria. Señaló que de conformidad con el art. 789 del Código de Comercio han transcurrido más de tres años presentándose el vencimiento de la acción cambiaria sin que se haya generado interrupción alguna, encontrándose prescritas desde el 23 de diciembre de 2017

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN e INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO: Indica que las letras de cambio se generaron a la garantía para amparar el pago de un contrato de cesión de los derechos de un título minero suscrito por la hija de la demandada, Mayeni Lisbeth Valbuena, contrato que no se perfeccionó porque el demandante había cedido a un tercero el título minero.

¹ Cons. 01 pdf 13

² Cons. 04 pdf 2

³ Cons. 05 pdf 34

⁴ Cons. 06 pdf 45

⁵ Cons. 08

⁶ Cons. 7

Menciona que los demandados y la hija de la demandada suscribieron un contrato de cesión de los derechos del título minero GDK111, el cual no se perfeccionó porque el demandante previamente cedió a Justo Armando Céspedes Nieves como consta en la resolución N° 504 del 3 de mayo de 2017 de la Agencia Nacional de Minería, lo que impidió la ejecución del contrato de cesión de derechos y por ende la obligación de pagar la suma garantizada en los títulos, ya que estas se suscribieron como garantía de dicho contrato.

COBRO DE LO NO DEBIDO, MALA FE Y ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR: manifiesta que se está pidiendo el pago de una obligación inexistente.

Y la excepción innominada, de existir probada otra excepción. Por último, se corrió traslado a las excepciones <art. 443 del C.G.P.> y por auto del 15 de agosto de los cursantes se tuvieron en cuenta las pruebas documentales conforme lo solicitado por las partes, conducentes, pertinentes y útiles para proferir sentencia anticipada ante la carencia de pruebas que practicar.

CONSIDERACIONES

Es importante aclarar que ante el control de legalidad realizado conforme al art. 132 ibidem, en búsqueda de irregularidades o vicios de procedimiento, no se encontró existencia de nulidad alguna que lo perjudique.

Para los requisitos esenciales y naturales del título ejecutivo, es imperativo tener en cuenta el artículo 422 del C.G.P. Entendiendo que el título valor expresa la literalidad de las obligaciones que consten en el título ejecutivo, para el caso bajo estudio letra de cambio.

Ahora bien, procede el Despacho a pronunciarse sobre la excepción “prescripción de la acción cambiaria”. Sobre esta institución extintiva de las obligaciones, el artículo 789 del Código de Comercio establece el término cuando tiene ocurrencia la prescripción.

El Código Civil alude al fenómeno de la prescripción y concretamente al hacer referencia a la prescripción como un medio de extinguir las acciones judiciales:

"2512. "La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción

2535. "La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible"

2538. "Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. "

A su turno el artículo 784 del Código del Comercio establece las excepciones que como defensa pueden proponer los demandados frente a la acción cambiaria, entre las que figura **la prescripción**, fenómeno que sólo requiere del mero transcurso del tiempo aunado a la inacción del acreedor.

Los términos prescriptivos se encuentran establecidos en los artículos 789 al 791 ibídem, diferentes de acuerdo con el tipo de acción cambiaria instaurada por el demandante y con la naturaleza jurídica de los obligados, si son directos o de regreso.

La prescripción de la acción cambiaria directa, que es la que nos ocupa en esta ocasión, se halla regulada en el artículo 789 del C. Co que establece: *“La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”*

Ahora bien, la prescripción de la acción se interrumpe de dos maneras, natural y civilmente, en el primer caso, cuando el deudor reconoce expresa o tácitamente su obligación frente al acreedor y civilmente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del C.G.P., con la notificación del mandamiento de pago al demandado, en cualquiera de sus formas, personal, por intermedio de apoderado o por curador ad-litem. El citado artículo 94 reza:

“La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el del mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado. (...)”.

Colofón de lo anterior, a continuación, se impone examinar los presupuestos que en el sub examine permitirán o no, declarar probada la excepción propuesta.

Los títulos ejecutivos base de recaudo corresponden a tres letras de cambio con fechas de vencimiento 22 de diciembre de 2014, 25 de marzo y 4 de agosto de 2015, no obstante, es patente que la presentación de la demanda (1° de junio de 2017), interrumpió ese fenómeno.

En cuanto a la notificación de la orden de pago a los demandados dentro del término del año que dispone el art. 94 transcrito, tenemos que la orden de pago producida en este proceso (6 de julio de 2017) se notificó por estado a la actora el día 7 de julio de 2017 <Cons. 04 pdf 2> data última desde el cual debe contarse el período referido, no obstante, se debió requerir al demandante para que procediera a notificar a la pasiva, ya que había dejado pasar más de 6 meses sin realizar la diligencia alguna tendiente a notificar <cons. 05 pdf 2>.

Así las cosas, tenemos que el año en que debía surtirse la notificación a los demandados vencía el **7 de julio de 2018**, y examinado el expediente se evidencia que ello tuvo lugar hasta el **día 20 de agosto de 2021, fecha en que le fue enviado el link del expediente a José Floriberto Valbuena –demandado excepcional–** <Cons. 08>, fecha en que pudo conocer de la demanda y el auto de apremio, esto es, tres años, un mes y trece días después, de tal forma que no se logró interrumpir a tiempo la prescripción.

En estas condiciones, palmario como está no logró el actor la notificación del ejecutado José Floriberto Valbuena, realizar en el lapso del año que permite el artículo 94 plurimencionado, atendiendo que el auto de apremio se notificó por estado el 7 de julio de 2017, la parte demandante contaba con un año a partir del día siguiente para notificar a la pasiva, esto es, hasta el 7 de julio de 2018.

El efecto práctico de la conclusión anterior no es otro que el de tener por prescritas las obligaciones que resultaban exigibles el 22 de diciembre de 2014, 25 de marzo y 4 de agosto de 2015, sin que se presentara la interrumpida de la prescripción en el sub lite, amen del vencimiento del plazo previsto en la consabida norma procesal.

Al revisar entonces el alcance o impacto que tiene la prescripción en el asunto sub iudice, se concluye que, como quiera que las letras de cambio fueron exigibles los días 22 de diciembre de 2014, 25 de marzo y 4 de agosto de 2015, obligaciones que fenecieron por prescripción; vale decir, que incluso se tuvo que conminar al actor para que procediera al enteramiento de la demanda al demandado <cons. 05 pdf 2>, pues después de librada la orden de pago éste dejó pasar 6 meses sin proceder a la notificación, pese a la falta de prueba de la interrupción natural.

En punto de las conclusiones precedentes, bien vale la pena citar el pronunciamiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia, la cual ha indicado que la sanción de la prescripción no puede aplicarse de manera objetiva, pues debe verificarse la conducta de los intervinientes e incluso del juzgado, así lo indicó en sentencia del 9 de septiembre del 2013 C-11001310304320060033901:

“2.2.- Para que el fenómeno extintivo sea de recibo, se exige que dentro del término al efecto señalado en la ley, la conducta del acreedor hubiere sido totalmente pasiva y además que no hubieren concurrido circunstancias legales que lo alteraran, como las figuras de la interrupción o la suspensión. Esto mismo, desde luego, descarta la idea de que la prescripción pueda considerarse un asunto netamente objetivo, de simple cómputo del término, y que, por lo tanto, corra en forma fatal, sin solución de continuidad.

Como tiene explicado la Sala, “jamás la prescripción es un fenómeno objetivo”, pues existen “factores subjetivos, que, por razones más que obvias, no son comprobables de la ‘mera lectura del instrumento’ contentivo de la obligación. La conducta de los sujetos de la obligación es cuestión que siempre ameritará un examen orientado a establecer si concurrentemente se configuran todas las condiciones que deben acompañar al tiempo para que con certeza se pueda decir si la prescripción ocurrió verdaderamente. Sólo así se llegará a determinar lo relativo a la interrupción y suspensión de la prescripción”.

En la misma línea, la Corte Constitucional en sentencia T-281 de 2015, sostuvo:

“Para que la prescripción extintiva se configure y sea reconocida por el funcionario judicial, requiere: i) el transcurso del tiempo y ii) la inactividad del acreedor demandante; por lo cual, como más adelante se recordará, esta Corte ha sostenido que cuando la falta de notificación al demandado se produce por negligencia de la administración de justicia y no por causas atribuibles al demandante, debe reconocerse que el término para la prescripción se ha interrumpido y ya no puede consolidarse este medio de extinción de las obligaciones

En suma, su configuración está evidente y palmariamente ocurrida, situación que forzará a declararla, por lo anterior, no se hace necesario entrar a estudiar las demás excepciones propuestas conforme lo establece el art. 282 del CGP.

Dado que prosperará la excepción de prescripción propuesta por uno de los demandados, es menester dilucidar que efectos tendrá esa declaración con respecto a la demandada que no la propuso ni propuso otras excepciones.

Debe decirse que la prescripción debe alegarse por la parte demanda; es así que, el artículo 282 del Código General del Proceso, prevé la renuncia tácita al decir que *“cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada”.*

De ahí que, la prescripción exige una manifestación de la voluntad de quien pretenda beneficiarse de ella, pues de lo contrario se tendrá por renunciada de forma tácita en los casos en que el autorizado para proponerla no haya abdicado de manera expresa (art. 2514 C.C.) o renunciada por ministerio de la ley tal como lo determina el art. 282 ejusdem.

Tal aserto lo confirma el hecho de que sea una figura jurídica que el juzgador no puede reconocer oficiosamente, al existir expresa prohibición en tal sentido (art. 2513 C.C y artículo 282 del CGP), de ahí que deba ser oportunamente alegada.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en SC-137 de 1993, ratificada en SC1297-2022, indicó que:

*(...) cuando se trata de excepciones que no pueden declararse de oficio (...), por cuanto emanan de circunstancias que podrían originar una pretensión autónoma que el demandado puede renunciar a ejercer como tal, es, de un lado, forzoso proponerla y, de otro, ineludible alegar y probar el hecho o hechos que la constituyen, y en los cuales pudiera deducirse que invocara el excepcionante para atacar la existencia de la acción o reclamar su extinción, si alguna vez hubiese existido, por cuanto **si no es obligación del juzgador declararla de oficio, cuando encuentre probado el hecho que la estructura, tampoco es deber suyo declararla por hechos o circunstancias no propuestos por el excepcionante** comoquiera que de no ser así, la precitada restricción carecería de función alguna (se resalta)."*

Posteriormente, se volvió a repetir en CJS SC 7 feb. 2007, rad. 2002-00004-01, al relieves que:

(...) cuando el demandado utiliza la prescripción como mecanismo defensivo, en la excepción respectiva deberá indicar el supuesto fáctico pertinente, pues únicamente de esta manera tendrá el demandante ocasión válida para generar la controversia, vale decir, para que frente a los hechos que con esa puntualidad se expongan en la excepción pueda ejercer su derecho de defensa y aducir las pruebas que crea conveniente; desde luego que, por lo mismo, la contienda acerca de ese mecanismo defensivo no podrá ir más allá del propio campo que ella definió, ya que en tal aspecto el litigio habrá de circunscribirse a ese marco; de lo anterior se desprende que ante la omisión del opositor en dar los hechos estructurales del medio exceptivo, al juez no le es dable suplir esa preterición y entrar a decidir el mérito del conflicto, toda vez que, de hacerlo, le violaría al actor el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto en tal evento podría resultar juzgándolo sobre unos supuestos que éste en su momento no pudo controvertir por la sencilla razón de no haberlos tenido en traslado.

Por tanto, tratándose de la excepción de prescripción, solo en el evento en que haya sido oportunamente propuesta, podrá el fallador pasar a resolverla, es así que dando alcance a la jurisprudencia para el caso en estudio ha de decirse que no cobija la prosperidad de la excepción a la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Avila por no haberla alegado, de ahí que se toma que la prescripción por ésta demandada fue renunciada conforme la preceptiva legal que así lo estatuye, por lo que procede seguir adelante la ejecución con esa demandada.

Por lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN invocada por el demandado **JOSÉ FLORIBERTO VALBUENA GONZÁLEZ**, conforme las razones indicadas en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: ORDENAR LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES ordenadas y/o practicadas sobre los bienes del demandado **JOSÉ FLORIBERTO VALBUENA GONZÁLEZ** por cuenta de este proceso. La secretaría proceda de conformidad verificando previamente la existencia de remanentes y/o créditos, de existir debe dejarse a disposición de la autoridad que las solicitó. **OFICIESE.**

Tercero: CONDENAR en costas al demandante ANGEL BAUDILIO GALEANO CASAS y a favor del demandado JOSÉ FLORIBERTO VALBUENA GONZÁLEZ. Fíjese la suma de \$2.500.000.00 como agencias en derecho para que sean incluidas en las costas.

Cuarto: ORDENAR SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN a favor de ANGEL BAUDILIO GALEANO CASAS en contra de MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA exclusivamente, tal como fue decretada en el mandamiento de pago, y conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

Quinto: ORDENAR que se practique la liquidación del crédito con sus intereses y costas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 446 del C. G. del P.

Sexto: AVALÚAR Y REMATAR los bienes embargados y secuestrados de la demandada MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA y los que en un futuro se embarguen y secuestren si es el caso, y con su producto páguese al ejecutante el valor de su crédito.

Séptimo: CONDENAR en costas a la demandada Mayeni Lisbeth Valbuena Avila y a favor de la parte actora. Fíjese la suma de \$8.500.000.00 como agencias en derecho para que sean incluidas en las costas.

Octavo. Cumplido lo establecido en el art. 366 del CGP por reunir el proceso las condiciones requeridas en el Acuerdo Nro. PSAA13-9984 de septiembre 5 de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura, y en cumplimiento al Acuerdo PCSJA17-10678 de mayo 26 de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, debe ser adelantada por los Jueces Civiles del Circuito de Ejecución. Por secretaria remítase el presente proceso a la OFICINA DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO de esta ciudad para su reparto. OFICIESE y dese cumplimiento a las directrices del Acuerdo en cita.

Noveno. De existir dineros a órdenes de este proceso y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo PSAA13-9984 de septiembre 5 de 2013 del C. S. de la J, efectúense las correspondientes conversiones a la OFICINA DE EJECUCION CIVIL CIRCUITO de esta ciudad. OFICIESE

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La juez

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0e617dced828dcfb14f031b27878b5e8e9d616546a533bb688777a9462598962**

Documento generado en 07/11/2023 08:05:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>